

enérgica y la violencia represiva fue en un aumento proporcional a la masividad de las protestas. La Iglesia se hizo eco del descontento, condenó la violencia e instó al diálogo, legitimando implícitamente la protesta popular³⁵. En este período llama a la cordura y se propone como mediadora del diálogo para dar pasos positivos hacia una real democracia. En 1983, luego de la más cruenta protesta con un saldo de cerca de 100 muertos por la represión, el Gobierno acepta el diálogo y el arzobispo de Santiago actúa como intermediario. En 1985, luego de convulsivos años, la Iglesia retoma un rol mediador al facilitar un acuerdo entre un amplio espectro político (excluyendo a un sector de la izquierda), el «Acuerdo nacional» que sienta las «bases para una salida pacífica hacia la plena democracia». Pero ambas iniciativas se empantanaron y finalmente fracasan a causa de la falta de apertura de las autoridades.

La voluntad moderadora de la Iglesia se estrella con la rigidez del régimen. La tensión llega a un punto álgido a propósito del asesinato del sacerdote Andrés Jarlán durante un allanamiento de la policía en un día de protesta en septiembre de 1984. Los obispos, respaldando el trabajo de los misioneros en poblaciones populares, piden que «la sangre de esta víctima inocente convierta nuestro odio en amor y nuestra violencia en paz». El arzobispo Fresno afirma el derecho de celebrar la misa de exequias de Jarlán en la catedral. A fines de año es dinamitado un templo parroquial en Punta Arenas y entre los escombros se encuentran los documentos de identidad de un teniente del ejército. En noviembre se reimplementa el estado de sitio y a raíz de un encuentro de obispos con exiliados en Europa el ministro del Interior acusa verbalmente a la Iglesia y niega el reingreso al país del Vicario de la Solidaridad. Monseñor Fresno protesta pero pide abandonar toda tentación de violencia e invita a una jornada de ayuno y oración³⁶.

El año 1986 —declarado «decisivo» por la oposición— fue decisivo pero para el gobierno. Luego de una exitosa jornada de protesta muy reprimida en julio de ese año, se descubrieron arsenales de guerra ocultos en el desierto del norte que pertenecían al frente guerrillero Manuel Rodríguez, cercano al Partido Comunista. Ese hecho sumado al atentado fallido al propio general Pinochet a principios de septiembre, desencadenó una feroz represión sobre la población y toda expresión opositora. El revés opositor se tradujo en desmovilización social y en el necesario sometimiento al itinerario constitucional programado por el régimen.

La represión de septiembre también alcanzó a la Iglesia. Fueron expulsados de Chile tres sacerdotes franceses que trabajaban en la población La Victoria con la falsa acusación de ser agitadores. La propia Conferencia Episcopal los defendió. La invitación que hicieron los obispos a modificar la constitución cayó en el vacío así como su denuncia de la violencia policial y represiva³⁷.

En el contexto de los esfuerzos de la Iglesia por la reconciliación y la democracia debe insertarse ese evento de enorme magnitud que fue la visita del Papa Juan Pablo II a Chile en abril de 1987. El Papa visitó el país a raíz del éxito de su mediación entre Chile y Argentina por un conflicto limítrofe que tuvo al borde de la guerra a ambos

³⁵ Cf. «Más allá de la protesta y la violencia», 24-6-83, *ibid*, pp. 117-118. Allí los obispos afirman que «disentir es un derecho innato que todos reconocen». Y agregan citando al Papa, «cuando el diálogo entre los gobernantes y el pueblo no existe, la paz social está amenazada o ausente, es como si se viviera en un estado de guerra».

³⁶ Cf. Monseñor Juan Francisco Fresno Larráin, Carta del arzobispo a la Iglesia de Santiago, Arzobispado de Santiago, 18 de noviembre de 1984.

³⁷ Cf. Conferencia Episcopal de Chile, Justicia o violencia, 7 de abril de 1986; y ¡Felices los constructores de la paz!, 13 de julio de 1986.

países a fines de 1978. La oportuna gestión de las Iglesias chilena y argentina, así como del Vaticano, evitó una catástrofe de proporciones entre naciones hermanas.

El Papa, como ya es habitual, congregó a multitudes tocando la fibra sensible de la religiosidad popular de las masas católicas. Sus discursos en general fueron bastante moderados, pero inequívocos en apoyar la labor de los obispos y de la Iglesia en Chile, respaldando incluso el llamado a avanzar pronto hacia una plena democracia. Sin embargo, su encuentro con el pueblo tan significativo, y los pasajes atractivos de su discurso³⁸, quedaron un poco empañados por su visita al Palacio de la Moneda donde rezó con Pinochet y, saliéndose de protocolo, saludó junto a él desde un balcón al público presente. Con todo el Papa también tuvo tres gestos muy significativos hacia la oposición política: la visita a la Vicaría de la Solidaridad confirmando el trabajo por la defensa de los Derechos Humanos; una reunión en la Nunciatura con dirigentes políticos opositores (incluyendo a los comunistas) y, por último, un encuentro con Carmen Gloria Quintana, víctima de horribles quemaduras en hechos protagonizados por una patrulla militar que provocaron además la muerte de Rodrigo Rojas en represión de protestas populares. El Papa instó a la joven, símbolo de la oposición, a continuar «luchando por la justicia y la libertad».

La visita papal revitalizó las energías religiosas y el trabajo pastoral de la Iglesia, pero no tuvo consecuencias políticas inmediatas, salvo servir de receso político cuyo término fue muy bien aprovechado por el régimen para levantar, en los meses siguientes, la candidatura de facto del general Pinochet al plebiscito de 1988. No obstante, a la luz de los procesos históricos debe evaluarse la visita papal, en términos políticos, como un impulso que favoreció la salida pacífica hacia la democracia.

La posición oficial de la Iglesia frente al plebiscito fue decisiva para promover un clima que garantizara un acto electoral válido en el cual se expresara la voluntad ciudadana. Desde 1987, llamó a participar en él, pero fijando con claridad las condiciones para que éste fuera válido. Declaraban estar de acuerdo con la necesidad de retornar a una plena democracia y en llamar a la reconciliación en la justicia y en la verdad, buscando los caminos del entendimiento, evitando el enfrentamiento. En asamblea plenaria apoyaron el llamado a la inscripción electoral a la ciudadanía, y definieron las condiciones básicas para que el plebiscito tuviera autoridad moral: voto secreto y libre, cantidad representativa de electores, escrutinios imparciales, libertad de información y propaganda en los medios de comunicación, cese de los «Estados de emergencia» y del intervencionismo electoral de funcionarios públicos y de las FFAA. Agregaban que «el voto debe inspirarse en motivaciones que sean coherentes con la fe que se profesa»³⁹ y en valores como el respeto por el bien común, la solidaridad especialmente hacia los pobres, la justicia, la paz y la libertad y el respeto a los derechos humanos. La última declaración de los obispos antes de la designación oficial del candidato por parte de la Junta de Gobierno solicitaba la nominación de un candidato de consenso⁴⁰ lo que se interpretó como un evidente veto a la figura de Pinochet.

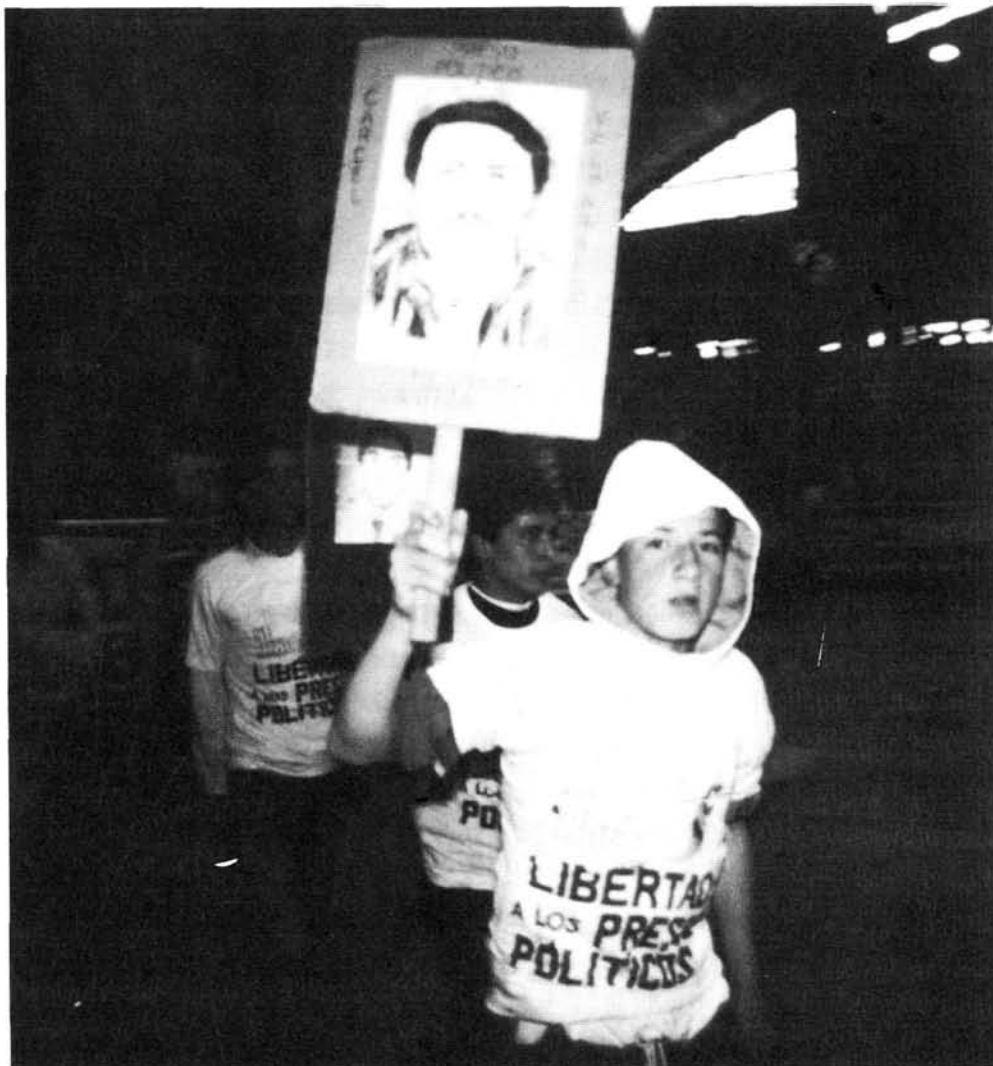
³⁸ Cf. *Cristián Parker, José Manuel de Ferrari, Ronaldo Muñoz y equipo, Lo que nos deja el Papa, Cuadernos Estepa, Santiago, 1987.*

³⁹ Cf. *Conferencia Episcopal de Chile, En justicia y paz, 22 de abril de 1988.*

⁴⁰ Cf. *Declaración del Comité Permanente del Episcopado, Mirando el bien del pueblo chileno, 10 de agosto de 1988.*



Mural en defensa de los presos políticos
(Foto: Jacobo Borizon)



Manifestación por la libertad de los presos políticos
(Foto: Jacobo Borizon)